**PROYECTO DE LEY \_\_\_\_ DE 2018 CÁMARA**

**Por medio del cual se adiciona un parágrafo 6° al artículo 75 de la ley 181 de 1995 y se dictan otras disposiciones**

**El Congreso de la República de Colombia**

**DECRETA:**

**Artículo 1º**. El artículo 75 de la ley 181 de 1995, tendrá un nuevo parágrafo 6, así:

Autorícese a los Concejos Distritales y Municipales, para crear una contribución al deporte que será utilizada para financiar el funcionamiento e inversión de los planes, programas y proyectos del sector deporte, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, en cumplimiento de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a los Distritos y Municipios.

El hecho generador de la contribución al deporte será la celebración de contratos, convenios y aceptación de órdenes de compra y adiciones en valor, que celebre la Administración Central del Distrito o Municipio, sus Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del mismo orden territorial, las Empresas Sociales del Estado del mismo orden territorial, las Sociedades de Economía Mixta donde el Distrito o Municipio y/o sus entidades descentralizadas posean capital social o accionario, las entidades descentralizadas indirectas y demás órganos que conforme o lleguen a conformar la administración del Distrito o Municipio.

Los demás elementos esenciales de la obligación tributaria aquí autorizada, serán determinados por los respectivos Concejos Distritales o Municipales.

En ningún caso estos dineros podrán destinarse para pagar gastos de funcionamiento.

**Artículo 2°.** La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

**OBJETO DEL PROYECTO DE LEY**

El presente Proyecto de Ley tiene como objeto fundamental darles a los Municipios y Distritos la posibilidad de contar con recursos económicos adicionales, derivados de la contribución al deporte para fortalecer el desarrollo e implementación de programas, proyectos y planes que impulsen el deporte y la recreación en todos los habitantes del territorio nacional.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El artículo 52 de la Constitución Política (modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo No. 2 de 2000) reconoce, el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, la norma determina, que el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, tienen como función principal, la formación y el desarrollo integral del ser humano; imponiéndole al estado, obligaciones correlativas de fomentar el deporte y velar porque su práctica se lleve a cabo de conformidad con principios legales y constitucionales propios del Estado Social de Derecho, materializados, a través de políticas públicas implementadas por las diferentes organizaciones recreativas y deportivas del orden nacional, departamental y municipal.

El anterior mandato constitucional, fue desarrollado a través de la ley 181 de 1995 que se creó con la finalidad de regular todo lo relativo a la masificación, divulgación, planificación, coordinación, ejecución y asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre; así como también, de fomentar la educación física para contribuir a la formación integral de las personas en todas sus edades y facilitarle, el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro activo de la sociedad.

El artículo 75 de la mencionada ley, se ocupó de definir cuáles eran los ingresos y rentas que financiarían las actividades que estarían a cargo de los entes deportivos departamentales, distritales y municipales; sin embargo, el precepto legal sólo discriminó de donde procedería el recurso con que contarían los entes deportivos de diferente rango territorial.

Luego entonces y después de múltiples intentos fallidos de Asambleas Departamentales y Concejos Municipales y Distritales de crear un tributo destinado a la financiación de las entidades encargadas de desarrollar las políticas públicas para el fomento del deporte a nivel departamental, distrital y municipal fundamentado en el numeral 3 del mencionado artículo, fue el Consejo de Estado quien dentro de un análisis exhaustivo de la ley 181 de 1995 y especialmente de su artículo 75 determinó, que el Congreso de la República sólo se limitó a enunciar los recursos financieros con que cuentan los entes deportivos y no autorizó la creación de un tributo a favor del deporte. Al respecto la sala sostuvo lo siguiente:

*“[…] del contenido del artículo 75 de la Ley 181 de 1995, no es posible inferir la creación de un tributo en cabeza de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, ni parámetros a partir de los cuales el ente territorial pueda establecerlo en su jurisdicción.*

*[…] la norma en comento se limita a enunciar uno de los recursos financieros de carácter estatal con que cuentan los entes deportivos departamentales para su ejecución, como son las rentas creadas por las Asambleas, que constituyen fuente económica para el cumplimiento de las metas relacionadas con el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.[[1]](#footnote-1)*

Asimismo, frente a la contribución al deporte del orden municipal, en sentencia de 5 de junio de 2014, la Sala precisó lo siguiente[[2]](#footnote-2):

*“[…] del contenido del artículo 75 de la Ley 181 de 1995, antes transcrito, se infiere que esta norma no crea ningún tributo, no autoriza su creación, ni fija con precisión y claridad los parámetros para establecer los elementos esenciales de algún gravamen, por lo tanto, no puede sostenerse que a partir de dicha disposición exista una autorización a los municipios para crear una contribución especial o ‘sobretasa’ con destino al deporte.”*

Por consiguiente, se hace evidente como esta ley desde su óptica aplicativa posee dentro de ella una carencia de componente tributario que le impide mostrar efectividad no sólo, en cuanto a la finalidad para la que fue creada; sino también, a la materialización de los fines esenciales y constitucionales del derecho a la recreación y al deporte.

Así las cosas, y conforme a las facultades que le otorga el artículo 338 de la Constitución Política a los entes territoriales para que, a través de sus órganos de representación popular, determinen los elementos esenciales de los tributos de acuerdo con la ley, el Congreso podrá desprenderse de la facultad exclusiva de crear tributos; ya que, de no ser así, seria engañosa la autorización que expresamente la Carta le confiere a los Departamentos y Municipios y Distritos en tales aspectos.

Con base en el anterior argumento, El Consejo de Estado reconoció la facultad que tienen las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales para establecer los elementos esenciales de los tributos locales, siempre que estos, hayan sido creados o autorizados por el legislador y se hayan determinado los lineamientos generales que deben tener en cuenta los órganos de representación para la determinación de los elementos del tributo, pues se reitera, que la autonomía tributaria de las entidades territoriales no es ilimitada, dado que en todo caso, debe mediar la intervención del legislador[[3]](#footnote-3).

Retomando los planteamientos generales expuestos por esa corporación sobre la potestad impositiva de las entidades territoriales, el alto tribunal se manifiesta en los siguientes términos[[4]](#footnote-4):

*“[…], creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que ésta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular.*

*Sin embargo, esta facultad no significa que una entidad territorial contemple como hecho generador del tributo uno diferente al que la ley de autorizaciones haya definido, pues violaría el principio de legalidad a que se ha hecho referencia. […]”*

De la misma manera, la Corte Constitucional en innumerables fallos y a la luz del principio de autonomía de las entidades territoriales consignado en el artículo 287 de la Constitución Nacional, ha manifestado:

*“…La Constitución Política define al Estado colombiano como “república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales” (C.P., art. 1º), quiere significar que “la unidad de la república no puede confundirse con el predominio absoluto del poder central sobre la autonomía territorial.”[[5]](#footnote-5)*Por ello, dijo el mismo fallo*, la definición constitucional requiere una interpretación según la cual, la unidad es “el todo que necesariamente se integra por las partes y no la unidad como un bloque”.[[6]](#footnote-6)*

De acuerdo con lo anterior, la autonomía de las diferentes entidades territoriales no consistía en la simple transferencia de funciones y responsabilidades del centro al nivel territorial, sino que se manifestaba como un poder de autogobierno y autoadministración”[[7]](#footnote-7)

Sin embargo, ha recabado en que ésta facultad debe ejercerse conforme a la Constitución y la ley, como se desprende de lo reglado por el articulo 287 superior[[8]](#footnote-8). Ahora bien, refiriéndose de manera particular a la autonomía de las entidades territoriales en materia tributaria, y más concretamente a la potestad que la Constitución les reconoce para la imposición de gravámenes[[9]](#footnote-9), la jurisprudencia ha hecho ver que aunque de la lectura del artículo 338 superior parecería deducirse una total autonomía impositiva de los departamentos y municipios; sin embargo, ello no es así, pues dicha disposición debe interpretarse en íntima relación con el artículo 287-3 de la Carta, conforme al cual tal autonomía impositiva se encuentra subordinada tanto a la Constitución como a la ley[[10]](#footnote-10).

De lo anterior ha concluido la Corte que para efectos de establecer un impuesto municipal se requiere siempre de una ley previa que autorice su creación, y que sólo cuando se ha creado legalmente el impuesto, los municipios adquieren el derecho a administrarlo, manejarlo y utilizarlo[[11]](#footnote-11)

Profundizando más en el alcance de la autonomía tributaria de las entidades territoriales, la Corte ha sostenido qué en virtud del principio unitario, no puede hablarse propiamente de una “soberanía fiscal” de dichas entidades, pero que su autonomía les permite establecer o suprimir los impuestos de su propiedad, que ya hayan sido creados por la ley. Dijo en este sentido la Corte:

*“La autonomía territorial, pues, tiene límites en relación con asuntos atingentes a los intereses nacionales. Tal es el caso del sistema tributario, gobernado por el principio de unidad, en virtud del cual se busca evitar que los tributos municipales resulten incongruentes con propósitos de mayor envergadura... la facultad de las asambleas y concejos para imponer contribuciones no es originaria, sino que está subordinada a la Constitución y a la ley; no obstante, las entidades territoriales gozan de autonomía, tanto para la decisión sobre el establecimiento o supresión de impuestos de carácter local, autorizados en forma genérica por la ley, como para la libre administración de todos los tributos que hagan parte de sus propios recursos (arts. 287-3 y 313-4 C.N.).[[12]](#footnote-12)*

Muchos han sido los pronunciamientos de este alto Tribunal Constitucional referente a la autonomía tributaria de los Departamentos y Municipios más recientemente, en Sentencia C-504 de 2002.[[13]](#footnote-13) En esta providencia, para declarar la exequibilidad de los literales d) e i) del artículo 1 de la ley 97 de 1913, que autorizaban al Concejo de Bogotá para crear los impuestos de alumbrado público y de “telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas”,[[14]](#footnote-14) la Corte sostuvo que mientras el Congreso tenía la potestad exclusiva para fijar todos los elementos de los tributos de carácter nacional, en lo atinente a tributos del orden territorial debía *“como mínimo crear o autorizar la creación de los mismos, pudiendo a lo sumo establecer algunos de sus elementos, tales como el sujeto activo y el sujeto pasivo”*, al propio tiempo que debía respetarle a las asambleas y concejos *“la competencia para fijar los demás elementos impositivos”[[15]](#footnote-15)*, en orden a preservar la autonomía fiscal que la Constitución le otorgaba a las entidades territoriales.

En conclusión, ha sido la jurisprudencia quien viene orientándose en el sentido de admitir que la autonomía tributaria de los entes territoriales exige al legislador reservar un espacio para el ejercicio de sus competencias impositivas, de manera que el Congreso, no puede determinar todos los elementos de la obligación tributaria, porque produciría un vaciamiento de las facultades de las asambleas y concejos.

Ahora bien, aunque la determinación por los entes territoriales de los elementos de la obligación tributaria debe llevarse a cabo siguiendo unas pautas mínimas fijadas por el legislador, la Corte ha considerado expresamente que *“la fijación de los parámetros básicos implica reconocer que ese elemento mínimo es la autorización que el legislador da a las entidades territoriales para la creación del tributo.”[[16]](#footnote-16) ; e*n otras palabras, la jurisprudencia ha aceptado que la sola autorización del tributo constituye un parámetro mínimo constitucionalmente aceptable, a partir del cual puede admitirse que las ordenanzas y los acuerdos puedan fijar los elementos de la obligación tributaria.

Corolario de lo anterior, se puede inferir que el deporte y la recreación ocupan un lugar importante dentro del texto constitucional a tal punto, que ser considerados instrumentos que buscan asegurar el bienestar, la salud y desarrollo de los habitantes del territorio colombiano motivo que conllevó al legislador, para que a través de la ley 181 de 1995 materializara la voluntad del constituyente haciéndose necesario hoy, preservarla garantizando su eficacia social.

Atentamente,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **MODESTO AGUILERA VIDES**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ARTURO CHAR CHALJUB**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **RICHARD ALFONSO AGUILAR V.**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ÁNGELA PATRICIA SÁNCHEZ LEAL**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **JOSÉ L UIS PÉREZ OYUELA**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **JOSÉ DANIEL LÓPEZ JIMÉNEZ**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LUIS E. DIAZ GRANADOS TORRES**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **JAIRO H. CRISTO CORREA**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **RODRIGO LARA RESTREPO**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **CESAR AUGUSTO LORDUY M.**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **DIDIER LOBO CHINCHILLA**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **JOSÉ GABRIEL AMAR SEPULVEDA**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **EDGAR JESUS DIAZ CONTRERAS**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **OSWALDO ARCOS**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **CARLOS A. JIMENEZ LÓPEZ**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **KAREN VIOLETTE CURE C.**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **CARLOS F. MOTOA SOLARTE**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **JOSÉ IGNACIO MESA BETANCUR**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **FABIAN G. CASTILLO SUÁREZ**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **JORGE BENEDETTI MARTELO**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ANA MARÍA CASTAÑEDA GÓMEZ**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **GUSTAVO HERNÁN PUENTES D.**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ANTONIO LUIS ZABARAÍN G.**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ERWIN ARIAS BETANCUR**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **DAIRA DE JESÚS GALVIS M.**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ELOY CHICHI QUINTERO R.**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **EMMA CLAUDIA CASTELLANOS**  Senadora de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NESTOR LEONARDO RICO RICO**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **GERMÁN VARÓN COTRINO**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ**  Senador de la República  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **CARLOS A. CUENCA CHAUX**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **DAVID ERNESTO PULIDO NOVOA**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **JULIO CESAR TRIANA QUINTERO**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **CARLOS MARIO FARELO DAZA**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **JOSÉ LUIS PINEDO CAMPO**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **JAIME RODRIGUEZ CONTRERAS**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **BAYARDO G. BETANCOURT**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ATILANO ALONSO GIRALDO**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **JORGE MENDEZ HERNÁNDEZ**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **SALIM VILLAMIL QUESSEP**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **HECTOR JAVIER VERGARA SIERRA**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **AQUILEO MEDINA ARTEAGA**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **OSCAR CAMILO ARANGO**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **CIRO FERNANDEZ NUÑEZ**  Representante a la Cámara  Partido Cambio Radical |

1. Sentencia de 17 de agosto de 2006, exp 153358 [↑](#footnote-ref-1)
2. Exp. 19945, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sentencia de 9 de julio de 2009, Exp 16544 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia [↑](#footnote-ref-3)
4. Sentencia de 15 de octubre de 1999, Exp. 9456, C.P. Julio E. Correa Restrepo. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cf. Sentencia C-540 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño [↑](#footnote-ref-5)
6. Cf. Sentencia C-478 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz [↑](#footnote-ref-6)
7. Cf. Sentencia C-540 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño [↑](#footnote-ref-7)
8. Cf. Sentencia C-121 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra [↑](#footnote-ref-8)
9. **Constitución Política. Artículo 287: *“****Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:*

   *“…*

   *“3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.*

   *“…”*

   [↑](#footnote-ref-9)
10. *Cf.* Sentencias C-04 de 1993, M.P. Ciro Angarita y C- 467 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Cf.* Sentencias C-467 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz [↑](#footnote-ref-11)
12. Sentencia C-506 de 1995. M.P Carlos Gaviria Díaz. En similar sentido puede consultarse la Sentencia C-521 de 1997, M.P José Gregorio Hernández Galindo. [↑](#footnote-ref-12)
13. M.P Jaime Araujo Rentería [↑](#footnote-ref-13)
14. La expresión “análogas” fue declarada inexequible. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Idem*  [↑](#footnote-ref-15)
16. Sentencia C-1043 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Negrillas fuera del original [↑](#footnote-ref-16)